

FLASHES A.S.E.P.

JULIO - 2001

FICHA TECNICA

Diseño y Realización: De la investigación, del cuestionario y de la muestra: A.S.E.P.

Diseño Muestral: 1.210 personas de uno y otro sexo, de 18 y más años, residentes en España. Muestra aleatoria estratificada por Comunidades Autónomas y estratos de municipios según su número de habitantes. Selección aleatoria de municipios y secciones censales dentro de cada estrato y de cada Comunidad Autónoma. Selección de hogares mediante sistema de rutas aleatorias dentro de cada sección censal. Selección final del entrevistado en cada hogar mediante cuotas de sexo y edad.

Trabajo de Campo: Realizado durante los días 9 al 14 de Julio de 2.001, mediante encuesta personal en el hogar de cada entrevistado, por la Red de Intercampo, S.A. Supervisión del trabajo de Campo realizado por A.S.E.P.

Proceso de Datos: Diseñado y realizado por A.S.E.P. con "software" propio, elaborado por J.D. Systems.

Análisis e Informe: Diseñado y realizado por A.S.E.P., y terminado el 26 de Julio de 2.001.

**DIRECCION:
JUAN DIEZ NICOLAS**

COPYRIGHT ASEP S.A., 2001. PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, INCLUSO CITANDO LA FUENTE.

"FLASHES"

(JULIO 2001)

Al llegar el mes de julio parece obligado hacer cierto balance de cuál ha sido el pulso de la opinión pública durante el último año, es decir, desde el pasado mes de septiembre. Puede afirmarse que los cambios que se detectaron a través del sistema de indicadores de ASEP el pasado otoño, en septiembre, se han mantenido con muy pocas variaciones durante todo el año. Se señaló entonces que, al volver del verano, se detectaba un gran contraste con los datos anteriores al verano, que sugerían un significativo incremento de la insatisfacción y del pesimismo entre los españoles. Se atribuía ese cambio a la subida del precio de los carburantes y al incremento de la inflación en general, así como a la significativa bajada de la Bolsa. Pues bien, el precio de los carburantes, con pequeñas oscilaciones, se ha mantenido en niveles muy superiores a los de antes del verano del 2000, la inflación hasta este mes de julio está en el nivel estimado por el Gobierno para todo el año 2001, lo que sugiere que a final de año será bastante superior a la tasa de inflación estimada, y la bajada de la Bolsa ha sido espectacular, hasta llegar a los niveles de 1998, con elevadas pérdidas para los pequeños ahorradores. Por tanto, parece lógico que los indicadores económicos (Sentimiento del Consumidor y Evaluación de la Situación Económica) se hayan mantenido durante todo este año, de septiembre del 2000 a julio del 2001, por debajo del nivel de equilibrio (indicando más insatisfacción y pesimismo que satisfacción y optimismo), fluctuando en una banda entre 93 y 100 (el ISC) y entre 87 y 99 (el IESE). Por razones similares, la Propensión al Ahorro ha fluctuado entre 132 y 142, indicando que hay más españoles que ahorran que españoles que se endeudan, y la proporción de ahorradores ha fluctuado entre 41% y 48% sobre el total de españoles de 18 y más años. (Debe tenerse en cuenta que en los sondeos de ASEP se mide la proporción de personas que ahorran, no el volumen del dinero ahorrado, lo que significa que es perfectamente compatible el incremento del número de ahorradores con una disminución del ahorro, y viceversa, pero a efectos de su influencia sobre las actitudes hacia la situación económica es más importante la variación en el número de ahorradores, que es lo que mide ASEP, que la variación en el volumen total de ahorro).

El Optimismo Personal (es decir, la evaluación que los individuos hacen de su propia situación económica), a pesar de que el paro ha disminuido de forma muy clara, también se ha visto afectado por la evaluación que los españoles hacen de la situación económica nacional, de manera que durante este último año ha fluctuado entre 98 y 105, es decir, prácticamente en el nivel de equilibrio, en claro contraste con los altos valores alcanzados durante los años anteriores al verano del 2000.

Es evidente que existe una clara influencia de la situación económica (tal y como es percibida por los ciudadanos) sobre la evaluación que éstos hacen de la situación política, una relación que ha sido ampliamente demostrada por la investigación en España y en muchos otros países. Así, la Satisfacción con el Gobierno ha disminuido de forma continuada y persistente desde un índice de 132 en julio del 2000 hasta 111 ahora en julio del 2001 (sólo en febrero se alcanzó un nivel más bajo, 108), sin que haya superado el nivel de 120 desde el pasado mes octubre. Por supuesto, se trata de una valoración claramente por encima del nivel de equilibrio (100), pero muy inferior a la que el Gobierno del PP había tenido a lo largo de 1999 y del primer semestre del 2000. Los siete puntos porcentuales de diferencia (sobre 100 electores) que logró el PP sobre el PSOE en las elecciones de marzo del 2000, y que le proporcionaron la mayoría absoluta (por la alta abstención de un 31% del electorado), se han ido reduciendo a los cuatro puntos porcentuales estimados en junio y julio, (con una abstención estimada sólo un punto inferior a la del 2000), aunque debe señalarse que esta diferencia fue sólo de un punto porcentual en diciembre y enero pasados.

En cualquier caso, sin embargo, y a pesar de que este no ha sido precisamente el mejor año para el Gobierno del PP, en comparación con años anteriores, como luego habrá ocasión de comentar en mayor detalle, parece que mantiene una clara ventaja sobre la oposición, más reducida que antes, por supuesto, pero en todo caso una clara ventaja, a pesar de que Rodríguez Zapatero ha tenido mejor valoración que Aznar desde que fue elegido Secretario General del PSOE (llegando esa diferencia a ser de incluso seis décimas, como este mes).

Y es que, a pesar de su buena imagen personal, Rodríguez Zapatero parece tener todavía fuertes problemas internos por la confrontación entre la nueva dirección del partido y la “vieja guardia” de Felipe González, que sigue ocupando importantes parcelas de poder en la organización. CiU tampoco

plantea problemas al Gobierno, pues desde las elecciones del 2000 ha dejado de ser imprescindible para la gobernabilidad de España, y por el contrario necesita ahora del apoyo constante del PP para poder gobernar en Cataluña, cada vez más acosado por el PSC de Maragall. Y el PNV, como ya se señalaba en los Flashes de junio, "aunque ha ganado las recientes elecciones autonómicas en el País Vasco, se encuentra en una difícil situación de equilibrio, ya que su exigua mayoría relativa le coloca en una difícil disyuntiva, pues si se acerca demasiado a los nacionalistas radicales de EH puede provocar el descontento del ala moderada de su partido, que podría verse tentada de pactar con los partidos constitucionalistas y derrocar al gobierno del PNV, y si se acerca demasiado a los partidos constitucionalistas puede provocar una reacción del nacionalismo radical, que se manifestaría mediante la violencia callejera en mayor medida aún que en la actualidad."

El "problema vasco" ha continuado siendo, a lo largo de este año, el principal problema para el Gobierno y para España. Las elecciones recientes del 13 de mayo no han resuelto el problema, como lo demuestra la continuidad de los asesinatos cometidos por ETA con total impunidad. Han pasado veinticinco años desde que se inició la andadura democrática y todavía se siguen oyendo las mismas frases a continuación de cada nuevo asesinato: "con esta muerte ETA no conseguirá nada" (cuando todo indica que está consiguiendo mucho), "esta muerte no tiene justificación" (como si el asesinato de alguna persona la tuviese), "hay que buscar soluciones políticas, y no policiales" (como si no se hubiesen producido numerosos intentos de soluciones políticas, desde la amnistía de Suarez hasta la mayor transferencia de competencias jamás imaginada), "no hay que responder a la provocación, pues eso es lo que buscan" (de manera que matar sigue saliendo gratis o muy barato para los criminales), etc. Lo cierto es que, cuando se mira hacia atrás, se comprueba que en el transcurso de los últimos veinticinco años se ha ido pasando de un sentimiento minoritario y no explicitado de voluntad independentista a un sentimiento creciente y claramente explicitado de independentismo.

Resulta curioso comprobar que quienes más arduamente defienden la tesis de que no hay que confundir las legítimas aspiraciones del nacionalismo vasco con las condenables prácticas del terrorismo de ETA son, al final, quienes más confunden las unas con las otras. Pues, si son dos cuestiones diferentes, habrá que darles un trato diferente. Es evidente que el nacionalismo vasco debe tratarse como una cuestión política. Y por las mismas razones, el terrorismo de ETA deberá ser tratado como una cuestión penal. Todas las investigaciones

conocidas demuestran sin lugar a dudas que el pueblo español respalda acciones más duras, pero legales, para combatir el terrorismo de ETA. Lo que se pide es que, si la legalidad establecida no demuestra su eficacia para erradicar el terrorismo de ETA, habrá que pensar en cambiar la legislación, por la vía parlamentaria, por supuesto, y con el máximo consenso con el principal partido de la oposición. Lo cierto es que, en las circunstancias actuales, incluso después de la reciente reforma de la legislación, matar sigue siendo muy barato, pues se sigue considerando prácticamente igual el asesinato de un cónyuge por parte del otro cónyuge en un arrebatado pasional, que el asesinato premeditado de un concejal, o de un militar, o de un agente de la policía autónoma o nacional. El pueblo español quiere medidas más duras (pero legales, por supuesto) contra los terroristas, así de claro, y es a los políticos a quienes corresponde buscar la fórmula para que esto pueda lograrse dentro de la legalidad constitucional.

La vinculación real, aunque pueda sinceramente no ser deseada por los nacionalistas, entre nacionalismo y terrorismo, es evidente. Cuando, a fuerza de asesinar concejales del PP y del PSOE, estos partidos se encuentren, como ya parecen empezar a encontrarse, sin candidatos para sus listas en las próximas elecciones locales, todos los concejales electos pertenecerán a partidos nacionalistas, y por tanto "demostrarán" que la sociedad vasca solo quiere estar representada por el nacionalismo. Con algo más de tiempo se logrará lo mismo en las elecciones nacionales.

Aunque el proceso se inició hace veinticinco años, cada vez es más patente la ausencia de la autoridad y la legalidad del Estado en el País Vasco, de manera que por vía de hecho se acepta una realidad de cuasi total autonomía de decisión en la vida diaria, empezando por el hecho perfectamente verificable de que la presencia de instalaciones de Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad del Estado, que es habitual y sin implicaciones de "ocupación" en cualquier otro lugar del territorio nacional, en el País Vasco se tiene que ocultar o camuflar, casi vergonzantemente, para no "provocar". Actuaciones por parte de autoridades públicas y de ciudadanos corrientes que, en cualquier otro lugar del territorio nacional, serían inmediatamente perseguidas por la policía y/o enjuiciadas por los tribunales de justicia, son toleradas y quedan impunes cuando tienen lugar en el País Vasco. Poco a poco, y siempre utilizando el victimismo como escudo protector y legitimador, el País Vasco se ha ido independizando "de facto" del resto de España, sin que el Gobierno

de la Nación de cada momento dé la respuesta adecuada, por temor a ser acusado de centralista, opresor, etc.

Las encuestas de ASEP, pero también otras del CIS y de otros institutos de opinión, han puesto de relieve que la opinión pública española no ha mostrado ningún deseo de declarar estados de excepción en el País Vasco, ni de pedir la intervención del ejército, ni siquiera de restaurar la pena de muerte para los terroristas convictos de delitos de sangre. Lo que estos estudios han puesto de manifiesto es que quieren que se cumplan allí las mismas leyes y con el mismo rigor que en el resto de España, que se apliquen penas más duras a los terroristas, y que las penas se cumplan en su integridad, sin reducciones de ningún tipo.

La cuestión del nacionalismo, como se ha dicho, requiere un tratamiento político, y no policial. Antes de las elecciones, como ya se ha comentado en estas páginas, lo previsible era que el PP y el PSOE lograsen más escaños que el PNV-EA (pero nadie con sentido común esperó nunca que los partidos "constitucionalistas" pudiesen tener más escaños que el PNV y EH conjuntamente, excepto algunos insensatos que después de anunciar lo imposible quisieron culpar a los "constitucionalistas" de fracaso electoral). Si se hubiese cumplido lo previsible, el PNV habría tenido que recurrir al apoyo parlamentario de EH para poder formar gobierno, lo que habría proporcionado a los moderados del PNV (que los hay) la justificación para oponerse mediante la amenaza de pasarse al grupo mixto, lo que habría permitido formar gobierno a los constitucionalistas o, más probablemente, haber obligado al PNV a unos planteamientos no radicales. No es este el momento de hacer "previsiones sobre el pasado", analizando lo que habría ocurrido si los constitucionalistas hubiesen formado gobierno, aunque es más que probable que ello habría provocado alteraciones muy fuertes del orden público y una situación de ingobernabilidad por la radicalización total del PNV. Pero sí puede decirse que el transvase de votos de EH al PNV, hasta el punto de que uno de cada tres votantes de EH votase en esta ocasión al PNV, hizo posible al PNV formar gobierno sin recurrir al apoyo parlamentario de EH, como así ha sucedido. Nadie ha explicado cómo se logró ese milagro de que un tercio del electorado de EH se "convirtiese" a los postulados del PNV, pero el milagro se produjo, aunque a punto estuvo de no producirse por un escaño que, en el último momento, perdió el PSOE en favor del PNV. Todo ha sido muy distinto, y desde luego mucho mejor para el PNV, por un solo escaño.

Algunos podrían sugerir que hubo cierto pacto preelectoral, en lugar de post electoral, entre PNV y EH, de manera que no se proporcionase una excusa a los diputados moderados del PNV para pasarse al grupo mixto, si el pacto postelectoral se hubiese producido. Si ese pacto preelectoral se hubiese producido, argumentan quienes suponen que existió, tuvo que tener alguna contrapartida, y parecería lógico pensar que esa contrapartida sería la de establecer la independencia como objetivo prioritario del programa político del nuevo gobierno vasco. Quienes rechazan la posibilidad de que pueda haberse producido ese acuerdo preelectoral se basan, muy fundadamente, en que ese tipo de acuerdos es difícil que se mantenga en secreto, pues alguien tendría que haberles dicho a más de ochenta mil electores de EH que votasen al PNV, y resulta difícil guardar un secreto entre ochenta mil personas. No obstante, argumentan los defensores de la hipótesis del pacto preelectoral, si existe la más mínima posibilidad de lograr mantener ese tipo de actuaciones en secreto, es precisamente con un partido de militancia pequeña, pero muy rígida y disciplinada, que actúe casi como una secta, y no debe olvidarse que el voto de EH (antes HB y ahora Batasuna) ha sido muy igual a lo largo de muchos años, hasta el punto de que cuando, en las elecciones generales del 2000, EH no se presentó a las elecciones, sus votantes no pasaron a votar al PNV ni a ningún otro partido, sino que casi unánimemente se abstuvieron de votar, siguiendo las indicaciones de su partido.

En cualquier caso, los hechos son los que son. No hay evidencia de que hubiese pacto preelectoral entre PNV y EH, y por tanto no se puede suponer que lo hubo. Pero sí hay evidencia de que el nuevo gobierno vasco ha establecido con carácter prioritario, como primer punto de su programa político en el acto de investidura de su nuevo presidente, el proceso hacia la independencia del País Vasco, y que ha podido hacerlo con el apoyo exclusivo de los diputados del PNV-EA, pues EH se abstuvo en la votación. Es también evidente que, si el PNV hubiese tenido sólo un escaño menos, no habría podido establecer la independencia como prioridad de su programa político, excepto recabando el apoyo parlamentario de EH, con el riesgo de pérdida de sus propios parlamentarios ya comentado.

No se trata aquí de ofrecer recetas para resolver un problema tan arduo como el planteado en el País Vasco, pero algunas cuestiones tienen que ver con la comunicación. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el PNV ha hecho una magnífica labor de identificación entre su partido y el País Vasco (su bandera y su himno son los de la Comunidad), y cuando hablan sus dirigentes siempre

hablan en nombre de "los vascos" y del País Vasco. Pero, ¿por qué no se puede adoptar la costumbre de que cada vez que hablan los dirigentes del PP o del PSOE en el País Vasco lo hagan en nombre de los "vascos" y del País Vasco? ¿Por qué se admite el uso casi sagrado de los símbolos del País Vasco y se critica su uso en otros contextos identitarios, incluido el español? Por ejemplo, ¿que ocurriría si, emulando al "dantzari" que baila el "aurreku" en los actos oficiales del País Vasco (en los que las autoridades presentan una imagen de seriedad y reverencia similar a como si estuvieran ante una importante ceremonia religiosa), los gobiernos de otras Comunidades decidiesen iniciar los actos oficiales con una pareja folklórica bailando una muñeira, unas sevillanas, una jota o un chotis?

La decisión del presidente Ibarretxe de comunicar al Rey y al Presidente del Gobierno de la Nación su intención de convocar un referéndum en el País Vasco (aunque no cumplida finalmente en su audiencia con el Rey), demuestra que el PNV y los nacionalistas llevan generalmente la iniciativa, y que el Gobierno de la Nación solo "responde" a cada iniciativa. Habría que cambiar la "definición de la situación" para que sea el Gobierno de la Nación quién tome la iniciativa, y obligue al Gobierno Vasco a dar respuesta en cada caso.

Pero, con independencia de la "cuestión vasca", la situación política con la que se tiene que enfrentar el Gobierno, y posiblemente la oposición mayoritaria (el PSOE), es el creciente distanciamiento entre los ciudadanos y la clase política. La anteriormente comentada estabilidad de las preferencias electorales a lo largo de todo el año, la escasa variación en las valoraciones de instituciones y líderes, contrastan efectivamente con los datos de años precedentes. Esa estabilidad puede ser producto de que los ciudadanos estén muy satisfechos (lo que no parece verse respaldado por los datos sobre satisfacción y optimismo que reflejan los indicadores de actitudes económicas y de consumo, ni por las bajas valoraciones que en general reciben las instituciones políticas y, sobre todo, los políticos y los partidos políticos), o de que los ciudadanos están instalados en un cierto sentimiento de desencanto y alejamiento de la clase política. El PP sigue contando con el favor del electorado, aunque menos que hace un año, a pesar de todas las calamidades que se han producido a lo largo de este año (atentados terroristas, inflación, precio de los carburantes, bajada de la Bolsa, incremento de la inseguridad ciudadana, "vacas locas", caso Ertoil-Piqué, "legionella" en Barcelona y más recientemente en Murcia, fiebre aftosa, peste porcina, aceite de orujo, Sintel,

huelga de pilotos de Iberia, huelga de transportistas y violencia de los piquetes en Baleares, incremento de la inmigración irregular, y un largo etcétera). Pero el PSOE tampoco parece estar levantando grandes multitudes entusiasmadas, aunque por supuesto cuenta con un confortable apoyo electoral, a pesar de la buena imagen de su nuevo y joven Secretario General, Rodríguez Zapatero.

Pero algunas grandes cuestiones no se discuten públicamente por los partidos políticos, cómo son las que tienen que ver con las finanzas. Los ciudadanos observan atónitos como cada vez pagan más impuestos (bajan unos pero suben otros), pero cómo toda una clase política nacional, autonómica y local, decide continuamente realizar gastos suuntuarios, subsidios y subvenciones poco explicados. En los ayuntamientos, por ejemplo, apenas son objeto de discusión los interminables contratos de obras públicas, que hacen que todas las ciudades y pueblos de España parezcan en permanente "reconstrucción nacional" (como después de la guerra), con calles permanentemente levantadas, con plazas que se remodelan una y otra vez en plazos de tiempo cada vez más cortos y por decisión de los mismos responsables, con zanjas que se abren y cierran todos los meses en lugar de coordinarse para abrirse una vez para todos los que lo necesitan. Muchos ciudadanos tienen dudas sobre la necesidad y transparencia en la adjudicación de esos contratos, y sobre la posible existencia de comisiones o tratos poco claros, pero los partidos políticos no parecen tener esas dudas, como si se tratara de un "hoy por tí" y "mañana por mí".

Muchos ciudadanos se preguntan por qué empresas que tienen grandes beneficios por su actividad, tienen luego grandes pérdidas por "malas inversiones" en negocios que no son los suyos, inversiones en las que más de una vez se publica (aunque sólo fugazmente) que posiblemente se trataba de una pésima inversión porque se pagaba un precio más elevado que el del mercado. En estas últimas décadas parece que han proliferado los malos gestores (en el sector público y en el privado) que se equivocan vendiendo más barato que el precio de mercado y comprando más caro que el precio de mercado, aunque lamentablemente los ciudadanos se enteran de la mala gestión cuando el mal ya está hecho y el daño es irreparable, o mejor dicho, cuando el mal solo es reparable pagando los daños con el dinero de todos los españoles recaudado a través de los impuestos. El último ejemplo, Gescartera, no es el único ni posiblemente el más importante, ni lamentablemente será el último.

La democracia en España está sólidamente establecida, no cabe duda. Pero ello no significa que no pueda ser continuamente perfeccionada. Y una de las cuestiones que posiblemente se requieren es la de reforzar la "accountability", es decir, que los responsables políticos rindan cuentas ante los electores directamente, y no sólo indirectamente ante sus partidos políticos, como sucede en la práctica. La legitimidad y representatividad de los representantes del pueblo constituyen uno de los fundamentos de la democracia, y no hay dudas sobre ellas en la democracia española. Pero la otra cara de la moneda es la de ante quién se rinden cuentas, y esa es la faceta que parece que requiere perfeccionamiento. En los últimos años los partidos han reclutado a sus representantes y cargos políticos atendiendo a razones de clientelismo y amiguismo político en detrimento de la necesaria preparación técnica, lo que conduce a que gran parte de los representantes (en los diferentes parlamentos, europeo, nacional, autonómicos y locales) lo sean sólo como pago de servicios prestados o que se prestarán, sin que en muchos casos se exija la preparación necesaria, de manera que son meros ejecutores de las decisiones que les vienen dadas "desde arriba". En las administraciones públicas sucede otro tanto, de forma que con frecuencia los altos cargos no disponen del personal técnico adecuado, pero les sobran toda clase de personas (generalmente no funcionarios) que ocupan los puestos por razones de clientelismo político y no por razones técnicas, y que cuando la situación lo requiere, no están capacitados para resolver el problema planteado. Puede que se piense que esta descripción es exagerada, pero cualquiera que haya conocido el funcionamiento de las administraciones públicas desde hace décadas puede corroborar la creciente desmoralización entre los funcionarios de carrera por el uso cada vez más frecuente de la discrecionalidad en la contratación (que luego se legitima mediante oposiciones o concursos restringidos).

En cualquier caso, parece evidente la creciente brecha que se ha abierto entre los ciudadanos corrientes y la denominada "clase política", que incluye a todos los partidos y también a los principales sindicatos, y que posiblemente se manifestará en el surgimiento de nuevas corrientes regeneracionistas tan frecuentes en España de tiempo en tiempo.

Los gobiernos del PP han demostrado su capacidad para hacer olvidar la época de corrupción de los últimos gobiernos socialistas, pero ello no debe conducir a una "bajada de la guardia", pues la corrupción es el gran cáncer de las sociedades actuales, y nadie, ningún país ni formación política, están inmunizadas frente a ella. Faltan todavía dos años y medio para las próximas

elecciones generales. En el año y medio transcurrido el Gobierno ha abordado una serie de cuestiones difíciles e impopulares, y ha logrado acuerdos de Estado muy importantes con la oposición. En el tiempo que queda debería aprovechar para vigilar mejor como se gasta el dinero de los contribuyentes en todas las administraciones públicas, y muy especialmente en las locales, y debería vigilar las prácticas poco transparentes de gestión en algunas grandes empresas que proporcionan servicios públicos. Es cierto que hay que defender el libre mercado, pero el Estado ha sido y debe seguir siendo el principal defensor del ciudadano frente a los intereses a veces desmedidos de algunas grandes corporaciones.

Como se decía en los Flashes de junio, la seguridad personal y la seguridad económica siguen siendo los objetivos más ampliamente deseados por la sociedad española, por lo que el aumento de la inseguridad ciudadana, el terrorismo impune, la inflación, y los posibles casos de corrupción, serán los principales elementos de erosión de la popularidad de cualquier gobierno. La comunicación y la imagen pueden ser muy importantes, pero al final cuentan los hechos. Y, en este sentido, no debe pasarse por alto el continuado descenso desde hace un año de la audiencia de los telediarios de TVE, así como el auge de los de Tele-5, y el cambio experimentado por la opinión pública respecto a la cadena COPE, en el sentido de que cada vez se la percibe menos como una cadena más favorable al PP que al PSOE, según se puede comprobar en el capítulo relativo al uso de medios de comunicación en el Informe sobre La Opinión Pública de los Españoles de este mes de julio, del que estos Flashes son sólo un resumen.

EL CLIMA DE OPINION

El Sistema de Indicadores vuelve a mostrar este mes una gran estabilidad respecto a los dos meses anteriores, sin que puedan apreciarse cambios significativos o tendencias claras, como si se hubiese establecido un compás de espera en el pulso de la opinión pública. Los dos indicadores principales sobre actitudes y comportamientos económicos se mantienen más o menos en el mismo nivel que el mes pasado, de manera que el Sentimiento del Consumidor es exactamente igual que los dos meses precedentes, aunque la Evaluación de la Situación Económica disminuye levemente hasta el nivel de abril. Ambos indicadores continúan, por tanto, algo por debajo del nivel de equilibrio, en un nivel similar al que han tenido desde septiembre del 2000 (con la única excepción del mes de marzo, cuando los dos indicadores se

situaron en el nivel de equilibrio). Otro tanto puede decirse de los dos indicadores habituales de ahorro (Propensión al Ahorro y Proporción de Ahorradores), si bien ambos indicadores muestran un ligero incremento respecto al mes de junio y también respecto a mayo, continuando una tendencia al incremento del ahorro que, habitualmente, se interpreta como indicando cierta preocupación de los ciudadanos por la situación económica.

Se mantiene también el Optimismo Personal en un nivel casi igual que el mes pasado, situándose cuatro puntos por encima del nivel de equilibrio, nivel que sólo dejó de alcanzarse en octubre del pasado año.

En lo que respecta a los indicadores políticos, se mantiene también la Satisfacción con el Funcionamiento de la Democracia, que continúa en un nivel muy alto. Pero continúa disminuyendo levemente la Satisfacción con el Gobierno, que todavía se mantiene en niveles moderadamente positivos y por encima del nivel de equilibrio, aunque continúa lejos de las altas valoraciones obtenidas en 1999 y hasta julio del 2000, alcanzando este mes el segundo valor más bajo de los últimos doce meses.

En cuanto al índice de exposición a la información, repite su valor del mes pasado, sólo algo por encima del nivel de equilibrio, pero alcanzando su valor más bajo de los últimos doce meses.

Los cuatro indicadores relativos a la Unión Europea son también casi idénticos a los del mes pasado, mostrando cierta satisfacción por la pertenencia de España a la UE, y percibiendo claramente muchos más beneficios que perjuicios tanto para España como para la Comunidad Autónoma y el propio entrevistado a causa de dicha pertenencia.

Las valoraciones de las cuatro instituciones fijas son este mes muy similares a las del mes pasado, y las de las instituciones no fijas son también en general parecidas a las de la última vez que se preguntó por ellas. Entre las instituciones fijas dos tienen exactamente la misma que el mes pasado (Bancos y Gobierno de la Nación), mientras que las otras dos aumentan significativamente, La Corona (4 décimas) y las Fuerzas Armadas (5 décimas). Y entre las instituciones no fijas, que todos los años reciben las valoraciones más altas de todas las instituciones por las que se pregunta, debido a que son tres organizaciones de ayuda social no gubernamental (Cruz Roja, ONCE y Cáritas), reciben puntuaciones que no fluctúan en más o menos

tres décimas en ningún caso. El ranking de este mes es el siguiente: Cruz Roja (8,0 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), la ONCE (7,8), Cáritas (7,6), La Corona (6,9), las Fuerzas Armadas (5,5), el Gobierno de la Nación (5,0) y los Bancos (4,8 puntos).

En cuanto a la imagen de personajes públicos, es también muy parecida a la del mes pasado (en el caso de los líderes fijos todos los meses), y a la obtenida la última vez que se preguntó por ellos (en el caso de los líderes no fijos). El ranking de valoración de este mes es el siguiente: Rodríguez Zapatero (5,4 puntos en una escala de 0 a 10 puntos), Felipe González (5,0), José M^a Aznar y Manuel Chaves (4,8 en ambos casos), Gaspar Llamazares (4,3), Jaume Matas (4,2) y Josep Piqué (3,9 puntos).

Debe subrayarse que la valoración de dos de los cuatro líderes fijos es este mes igual a la del mes pasado (Felipe González y Aznar), pero aumentan dos décimas las valoraciones de Rodríguez Zapatero, Llamazares y Chaves.

En cuanto a la estimación de voto de este mes, se mantiene la diferencia entre el PP y el PSOE en cuatro puntos porcentuales (tres menos que en las elecciones de marzo del 2000, sobre la base de 100 entrevistados y 100 electores respectivamente) como en los dos meses pasados, y con una abstención estimada ahora que es un punto porcentual inferior a la que realmente se produjo en las pasadas elecciones de marzo del 2000.

LA ACTUALIDAD

En las preguntas de actualidad de este mes se han abordado algunas cuestiones relativas a la construcción de la Unión Europea y a las relaciones con los ciudadanos de otros países europeos, a las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, a las privatizaciones de empresas públicas y a las manifestaciones violentas.

La Construcción de la Unión Europea

La reciente discusión en algunos países de la UE sobre los problemas y ventajas que puede plantear la ampliación de la Unión Europea desde los actuales 15 estados miembros hasta 27, según se acordó en la última cumbre de Niza, y sobre todo el rechazo a esa ampliación por parte de Irlanda, a causa

de un referéndum negativo, hacían aconsejable saber qué opinarían los españoles sobre algunos de los acuerdos principales de España con la UE si éstos se pusieran o hubiesen puesto a referéndum del pueblo español. Concretamente, se ha preguntado por lo que los españoles votarían si se pusiese a referéndum la permanencia de España en la Unión Europea, la incorporación de España a la moneda única (el "euro"), y la ampliación de la Unión Europea desde los actuales 15 miembros a los previstos 27 en un próximo futuro.

En relación con la primera cuestión, un 80% de los españoles de 18 y más años se reafirman en que votarían a favor de que España siga dentro de la Unión Europea, y sólo un 11% votarían en contra de que España siga siendo miembro, mientras que un 9% no dan su opinión.

En cuanto a la moneda única, dos de cada tres españoles de 18 y más años votarían a favor de la adopción por parte de España de la moneda única, pero algo más de uno de cada cuatro votarían en contra, y sólo un 9%, como en el caso anterior, se abstienen de dar su opinión.

Por tanto, una clara y significativa mayoría de españoles respaldan las actuaciones ya adoptadas por los Gobiernos de España en el pasado, tanto en relación con la incorporación a la Unión Europea (en 1986, con un gobierno socialista) como con la adopción de "euro" como moneda única europea (decisión adoptada por un gobierno popular y que entrará en vigor en el 2002). Pero, en relación con el importante tema pendiente, acordado en la reciente reunión de Niza, y que habría de llevarse a cabo a partir del 2002, la opinión pública parece menos informada y algo más reticente. En efecto, una leve mayoría del 55% de los entrevistados se muestra favorable a la ampliación a 27 miembros, mientras que un 17% se manifiesta contrario a tal ampliación, y más de una cuarta parte de los entrevistados no contesta a la pregunta.

Actitudes de los Españoles hacia los Otros Europeos

Cuando se pregunta a los españoles cuál es el país de la Unión Europea que les cae mejor, una cuarta parte no contestan a la pregunta en absoluto, pero la mayoría parecen decantarse por Italia (19%), Francia (11%), Holanda, Alemania y Portugal (8% en los tres casos). Los restantes nueve países no son mencionados por proporciones superiores al 3%.

Pero, cuando se les pregunta a los españoles por el país que les cae peor, el consenso es bastante mayor en señalar al Reino Unido (22%) y Francia (20%), si bien un 8% menciona a Alemania, y los restantes once países son mencionados por menos de un 3% de entrevistados, pero el 32% no contesta a la pregunta.

Como se ve, hay países como Francia que despiertan filias y fobias en proporciones importantes de la población, y otros como Alemania que parecen estar equilibrados entre aquellos que les mencionan porque les cae bien y quienes lo hacen porque les cae mal.

Pero también es cierto que hay países que cuentan más que otros para los españoles, en el sentido de que les mencionan para bien o para mal, mientras que otros países son ignorados por la mayor parte de los españoles, es decir, no parecen ser conscientes de su existencia.

Combinando ambas dimensiones del análisis, se puede comprobar que, sumando los porcentajes de entrevistados que mencionan a un país porque les cae bien o porque les cae mal, cinco países destacan claramente como más salientes para los españoles: Francia (31%), Reino Unido (24%), Italia (22%), Alemania (16%) y Portugal (11%). Pero, mientras que Francia (-9%) y sobre todo el Reino Unido (-20%) muestran claros saldos negativos de imagen entre los españoles (porque predomina claramente la proporción de los que afirman que esos países les caen mal sobre los que dicen que les caen bien), Italia tiene un saldo de imagen muy positivo (+16%) y Portugal moderadamente positivo (+5%), y sólo Alemania tiene un saldo cero, ya que la proporción de los españoles que dicen que les cae bien es igual que la de los que dicen que les cae mal.

Por otra parte, se pidió a los entrevistados que dijeran a qué grupos nacionales europeos se aplicaban mejor cada uno de cuatro adjetivos: trabajadores, poco fiables, tolerantes y autoritarios. Puesto que cada adjetivo se podía aplicar incluso a todos los grupos nacionales, los porcentajes son totalmente comparables entre sí, ya que la aplicación de un adjetivo a un grupo no impedía ni su aplicación a todos los demás grupos, ni la aplicación a ese grupo nacional de los otros tres adjetivos.

Puede así observarse que el adjetivo "trabajador" creen los entrevistados que es aplicable sobre todo a los alemanes (44%) y a los españoles (38%), que el

adjetivo "poco fiable" es sobre todo aplicable a los ingleses (22%) y franceses (21%), que el adjetivo "tolerante" es aplicable sobre todo a holandeses y españoles (23% en ambos casos), y que el término autoritario es aplicable sobre todo a ingleses (28%) y alemanes (23%).

Analizando los datos de distinta forma, se puede afirmar que holandeses, alemanes, franceses, ingleses y españoles son los únicos grupos nacionales que tienen una imagen definida entre los españoles, pues más de un 20% de los entrevistados les mencionan en relación con uno o más de los cuatro adjetivos indicados. Por el contrario, el resto de los grupos nacionales nunca son mencionados por más de un 20% en relación con ningún adjetivo, y en todos ellos, excepto italianos y griegos, el adjetivo que se más frecuentemente se les aplica es el de "trabajador", mientras que el adjetivo que más frecuentemente se atribuye a italianos y griegos es el de "poco fiables".

Percepción de las Relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos

Alrededor de la mitad de los entrevistados opinan que las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son buenas o muy buenas, y menos del 5% creen que son malas o muy malas, siendo un 10% los que no opinan sobre la cuestión.

Y estos datos son prácticamente idénticos cuando se pregunta por cómo serán las relaciones entre ambos bloques en los próximos años, con la única diferencia de que la proporción que no opina es algo mayor (16%).

La Privatización de Servicios Públicos

Durante los últimos años, siguiendo el proceso ya iniciado por los últimos gobiernos socialistas, el Gobierno del PP ha privatizado gran número de servicios públicos, respondiendo en muchos casos a las exigencias de la Unión Europea. Por ello, ha parecido conveniente preguntar a los españoles si, en su opinión, estos servicios han mejorado o empeorado al ser privatizados en comparación con la etapa anterior en que eran propiedad del Estado.

Utilizando un índice que resume en una escala de 0 a 200 puntos (con punto de equilibrio en 100, que significa que la proporción de los que creen que el servicio ha mejorado es igual que la de los que creen que ha empeorado), se comprueba que los españoles opinan mayoritariamente que los teléfonos, la

electricidad y la limpieza urbana han mejorado al dejar de ser servicios públicos para convertirse en privados, pero opinan también mayoritariamente que el transporte aéreo, y la gasolina y carburantes, han empeorado al privatizarse.

No debe olvidarse, sin embargo, que cuando se habla de mejora o empeoramiento se está haciendo referencia, ineludiblemente, a una comparación en términos relativos respecto a un determinado nivel de bondad, de manera que se puede opinar que un servicio es muy malo pero ha mejorado algo (aunque siga siendo malo), y que un servicio es muy bueno pero ha empeorado algo (aunque siga siendo bueno). Por ello, y con el fin de tener cierta idea de cual es la evaluación que los españoles hacen de los servicios citados según sean públicos o privados, se les preguntó cuáles funcionaban mejor en cada caso, los privados o los públicos. Es evidente que, en estos momentos, no existe un servicio telefónico público (pues Telefónica está privatizada), ni unas empresas de electricidad públicas (pues Endesa está privatizada), ni un transporte aéreo público (pues Iberia está privatizada). Pero la privatización de estos tres sectores ha sido tan reciente, y el papel del Estado en las nuevas empresas privatizadas es todavía percibido como tan importante, que gran parte de la opinión pública todavía las sigue considerando, a veces inconscientemente, como empresas públicas. No es ese el caso, por supuesto, de otros servicios, como la seguridad personal, la televisión, la asistencia médica y la enseñanza obligatoria, en los que la opinión pública distingue perfectamente entre el sector público y el privado.

Esto explica que, cuando los entrevistados tienen que contestar si funcionan mejor los servicios públicos que los privados, apenas existen diferencias en las proporciones que señalan unos u otros en relación con las empresas de electricidad (1 punto de diferencia, en favor del sector público), o el transporte aéreo (1 punto de diferencia, en favor también del sector público). Sin embargo, las diferencias son muy grandes cuanto más antigua ha sido la existencia de servicios privados en coexistencia con los servicios públicos, de manera que la mayor diferencia se observa respecto a la enseñanza obligatoria (21 puntos porcentuales de diferencia en favor de la enseñanza pública), seguida de la de la asistencia médica (10 puntos de diferencia en favor de la asistencia pública), de la televisión (8 puntos de diferencia en favor de la pública) y de la seguridad personal (5 puntos de diferencia en favor de la pública). Un caso curioso es el de los servicios telefónicos, pues se trata de un servicio que ahora no existe en el sector público, pero que ha sido privatizado

muy recientemente, y que sin embargo es percibido todavía como si fuese público, lo que parece explicar que la diferencia sea de 6 puntos porcentuales, y además, en favor de los servicios telefónicos privados.

Manifestaciones y Violencia Callejera

Hasta ahora, el tema de las manifestaciones violentas en las calles había sido conocido como el de la "guerrilla urbana" de inspiración marxista o maoísta en la década de los años setenta (continuación del mayo del '68 y de los movimientos juveniles contra las dictaduras comunistas en los países del Este de Europa), así como los disturbios callejeros derivados de acontecimientos deportivos (generalmente provocados por seguidores de clubs de fútbol que, o bien celebraban un triunfo o protestaban de una derrota). En España, más recientemente, también, ha sido cada vez más frecuente la violencia callejera de inspiración terrorista de ETA en el País Vasco, y con menos frecuencia otro tipo de manifestaciones basadas en reivindicaciones laborales-sindicales que, también con creciente frecuencia, acaban en fuertes enfrentamientos con las fuerzas de orden público y con rotura y quema de establecimientos comerciales y de automóviles así como del patrimonio urbano. De un tiempo hasta ahora, sin embargo, este tipo de manifestaciones ha sido relacionada, con creciente frecuencia, a los movimientos antiglobalización.

En este sondeo de julio se ha preguntado por la opinión de los entrevistados respecto a la reacción del gobierno (a través, naturalmente, de las fuerzas de orden público) en las recientes alteraciones del orden público relacionadas con la manifestación antiglobalización en Barcelona, con los incidentes frecuentes de violencia callejera en el País Vasco, la huelga de pilotos de Iberia y algunas otras por el estilo (mientras se estaba realizando el trabajo de campo se producían las graves alteraciones del orden a causa de los "piquetes" en la huelga de transportes en Baleares, así como los preparativos para la conferencia del G-7 en Génova).

Concretamente, un 34% de los entrevistados cree que el Gobierno ha actuado en estos casos, conjuntamente, de forma más bien dura o excesivamente dura, frente a un 25% que opinan que ha actuado de forma más bien blanda o excesivamente blanda, y un 22% creen que ha actuado de forma adecuada, además de otro 19% que no contestan a la pregunta. En conjunto, por tanto, la opinión pública parece decantarse algo más en favor de la evaluación de la actuación del gobierno como dura más que como blanda. Pero debe tomarse

en consideración que algo menos de una quinta parte de los entrevistados no opinan sobre la cuestión, y que algo más de una cuarta parte de ellos creen que el gobierno actuó adecuadamente, por lo que más bien deben interpretarse los datos, para el conjunto de la muestra, como reflejando un cierto equilibrio entre los que opinan que actuó de forma blanda, adecuadamente y con dureza. En cualquier caso, debe asimismo tenerse en cuenta que la pregunta incluía actuaciones muy diversas, como la "kale borroa" del País Vasco, la huelga de Iberia, etc., que posiblemente evocaron en los entrevistados sentimientos no necesariamente iguales. Después del verano se abordará este tema con mayor detalle, teniendo en cuenta sobre todo el previsible auge de las manifestaciones antiglobalización, con el fin de comprobar hasta qué punto predomina entre los españoles el deseo de mantener el orden en la sociedad (como se comentó en los Flashes de junio) o el de reivindicar causas aparentemente justas y defender los derechos a la libre expresión y manifestación.